

La Oficina manifiesta su preocupación por la vida de miembros del Instituto Popular de Capacitación

La Oficina expresa su profunda preocupación por la vida de Jairo Bedoya, Oiga Rodas, Jorge Salazar y Claudia Tamayo, miembros del Instituto Popular de Capacitación (IPC), con sede en Medellín, Antioquia, quienes en el día de ayer, en forma violenta y contra su voluntad, fueron sacados de sus oficinas por un grupo de personas armadas, desconociéndose actualmente su paradero.

La Oficina condena estos lamentables hechos que se producen en momentos particularmente graves de emergencia nacional, atentando contra la respetable y legítima labor de los defensores de los derechos humanos y hace un llamado a los captores para su inmediata liberación.

La Oficina reconoce las gestiones adelantadas por las autoridades, dirigidas a la investigación de estos hechos y la búsqueda del paradero de los trabajadores del IPC. No obstante, la Oficina exhorta al Estado a darle la más alta prioridad a la adopción e implementación de medidas que garanticen una efectiva y adecuada protección de los defensores de los derechos humanos, así como en el impulso de la pronta investigación y la consecuente sanción de estos gravísimos hechos.

En ese sentido, solicita al Ministerio del Interior la implementación de medidas eficaces para la protección individual e institucional de los defensores y sus sedes, y el pronto cumplimiento de los compromisos asumidos en el seno del Comité de Evaluación de Riesgos a fin de prevenir acciones de esta naturaleza.

La Oficina recuerda el compromiso del Estado consignado en la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales sobre el deber de garantizar, a través de las autoridades competentes, la protección de estas personas frente a toda violencia, amenaza, represalia, o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos humanos.

La Oficina reitera a las autoridades colombianas la recomendación de la Alta Comisionada en el sentido de: Hacer efectivo el reconocimiento del derecho de los defensores de los derechos humanos a desarrollar sus actividades sin ingerencias ni impedimentos ilegítimos, y en condiciones de plena seguridad para su vida, su integridad y su libertad.